

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, seis (06) de octubre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio nro. 278.

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76-001-33-33-002-2015-00158-01
DEMANDANTE:	ILIANA EDITH GIRÓN ALVAREZ Juan.velasco02@gmail.com
DEMANDADO:	HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E. notificacionjudicial@hospitalidc-valle.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO	fimoreno@procuraduria.gov.co
ASUNTO	Confirma auto que decreta medida cautelar

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto nro. 286 y el auto nro. 288 del 27 de mayo de 2019 proferidos por el Juzgado Quinto Administrativo de Cali, el primero obedeció y cumplió lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en la providencia del 26 de septiembre de 2018 y libró mandamiento de pago en contra del Hospital Isaías Duarte Cancino E.S.E y a favor de la sociedad Medeiros S.A.S., y el segundo, decretó el embargo y retención de los dineros que posee el Hospital Isaías Duarte Cancino ESE.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del proceso ejecutivo la representante legal de la sociedad Medeiros S.A.S., solicitó librar mandamiento de pago en contra del Hospital Duarte Cancino E.S.E por la suma de \$96.806.813, correspondiente a la ejecución de los contratos nros. 15, 23, 29, 30, cuyos valores acordados no fueron cancelados por la entidad demandada.

III.DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 286 del 27 de mayo de 2019 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Cali, se obedeció y cumplió lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en la providencia del 26 de septiembre de 2018, y se libró mandamiento de pago a cargo del Hospital Isaías Duarte Cancino E.S.E y a favor de la sociedad Medeiros S.A.S. Los argumentos expuestos fueron los siguientes:

“1.1 La sociedad MEDEINHOS S.A.S a través de apoderado judicial presentó demanda ejecutiva, con el propósito de que se libere mandamiento ejecutivo contra el Hospital Isaías Duarte Cancino E.S.E. por un monto total de \$96.806.813, respecto de 31 facturas que aportó como soporte de título ejecutivo, junto con copia de los correspondientes contratos

RADICACIÓN : 2015-00158-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ILIANA EDITH GIRON ALVAREZ
Demandado : HOSP. ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E



que la demandada enumeró como 15, 23, 29 y 30, todos ellos correspondientes al año 2013, por concepto de suministro de medicamentos químicos e insumos quirúrgicos.

“1.2 El Despacho, mediante auto No. 644 de 3 de octubre de 2016, negó el mandamiento de pago.

1.3 Mediante providencia de fecha 26 de septiembre de 2018 el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca al resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora resolvió:

“1. Revocar el Auto Nro. 420 del 18 de mayo de 2017, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali, que negó el mandamiento de pago, por las razones expuestas.

2. En su lugar, SE ORDENA al a quo librar mandamiento de pago, en cuanto a las facturas y contratos que a continuación se señala:

“ ...

2. Con relación a los intereses el Despacho librará orden de pago por aquellos que considera legal, con fundamento en lo previsto en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, que a letra reza:

“8°. Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.

Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haber pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.

A su vez, el artículo 1617 señala:

“Artículo 1617 Código Civil. El interés legal se fija en seis por ciento anual”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, en el numeral tercero de la parte resolutive de la providencia mencionada dispuso:

“3- Por los intereses generados por las sumas líquidas de dinero indicadas en el numeral precedente, desde que cada una de las obligaciones se hicieron exigibles y hasta que se efectúe la solución o pago total de la obligación a la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, conforme lo señalado en el numeral 8 del art. 4 de la Ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario (1510 de 2013).

Por su parte, el auto nro. 288 del 27 de mayo de 2019¹ proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Cali consideró:

Que en tres eventos se pueden embargar recursos que en principio no lo serían, los cuales son: i) recursos de libre destinación, ii) recursos destinados al pago de condenas judiciales o conciliaciones, o iii) recursos destinados al sistema de seguridad social.

¹ Folio 2 Cdn. medidas cautelares

RADICACIÓN : 2015-00158-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ILIANA EDITH GIRON ALVAREZ
Demandado : HOSP. ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E



Manifestó que en el presente asunto se pretende la ejecución de unos recursos destinados al sistema de seguridad social, teniendo en cuenta que el título proviene de una relación contractual para el suministro de medicamentos e insumos quirúrgicos, es decir, que las obligaciones reclamadas tienen como fuente la actividad a la cual estaban destinados los recurso del SGP, cual era prestar el servicio de salud a los afiliados, de acuerdo a los contratos ejecutados.

Consideró que era procedente decretar el embargo y congelamiento de los dineros que la entidad ejecutada tiene como titular en las cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a término fijo (CDT) o cualquier otro tipo de producto financiero que se encuentren en las entidades bancarias.

Finalmente consideró que en virtud del artículo 599 del CGP el embargo se limitaría a la suma de \$64.201.082.

IV.FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante, presentó recurso de apelación contra la decisión tomada por el Juzgado Quinto Administrativo de Cali, argumentado:

“ ...”

Como se puede inferir la orden de librar andamio ejecutivo y limitar la cantidad embargable por SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$64.201.082) moneda corriente vigente legal colombiana, según aplicación del artículo 1617 de CODIGO CIVIL, y del artículo 599 del CGP, no es ni siquiera la mitad del monto reconocido en segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, donde se ordenó pagar las siguientes cantidades:

“ ...”

Teniendo en cuenta el anterior recuadro, en aplicación de la Ley en mención la 1150 de 2007, que por su naturaleza es de CONTRATACIÓN PÚBLICA, como lo es el presente caso, determina que estas cantidades se deben AJUSTAR AL VALOR ACTUAL y reconocer interés al DOBLE DEL INTERES LEGAL, caso que ignora por completo este despacho por no dar la correcta aplicación como la mencionada en los respectivos autos en mención.

Por lo tanto, y en lo correspondiente a lo que determina la 1150 de 2007, la liquidación soportada en dicha norma debería ser la siguiente:

“ ...”

De tal manera que sumado las dos cantidades, tanto el capital debido y los intereses legales al doble del civil, se obtendría una suma equivalente a OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS, moneda corriente pretendida por el juez de primera instancia.

“ ...”

No obstante, se sigue insistiendo que los INTERESES MORATORIOS tasados a la tasa máxima legal establecida por la SUPERINTENDENCIA son procedentes, y no existe una razón bien fundamentada por el despacho de primera instancia que siga desvalorizando aún más los montos que solo por el principio de LEGALIDAD le fueron reconocidos a mi poderdante, a sabiendas que esta entidad le hizo un daño enorme al quedarse con más de la mitad de los bienes entregados de buena fe por parte de la demandante.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente soportado, no encuentro justificación lógica por parte del despacho de primera instancia que disponga de tres normas diferentes para seguir favoreciendo a la entidad demandada, a la cual en primera instancia la ABSOLVIÓ sin tener en cuenta lo que el de segunda instancia si determinó bajo los principios legales para reconocer al menos una pequeña parte de las sumas de dinero demandada.



V.CONSIDERACIONES:

5.1. COMPETENCIA

Por remisión expresa de los artículos 299 y 306 del CPACA, de conformidad con el numeral 8 del artículo 321 del CGP el auto que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución son susceptibles del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

“Art. 321. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

(...)

8.- El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla

(...)

Ahora bien, el artículo 438 CGP dispone que el auto que decide el mandamiento ejecutivo no es apelable², salvo que lo niegue total o parcialmente, en el presente asunto el auto nro. 286 del 27 de mayo de 2019 libró mandamiento de pago a cargo del Hospital Isaías Duarte Cancino ESE, lo que según lo expuesto en la norma en cita no es susceptible del recurso de apelación, por tanto, el Tribunal no es competente para conocer del mismo.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae en establecer: si en el presente asunto los intereses moratorios que devienen del incumplimiento de un contrato estatal deben ser liquidados teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993 o teniendo en cuenta la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera.

5.3 TESIS DEL DESPACHO

El Despacho confirmará la decisión apelada, ya que al ser el título ejecutivo un contrato estatal, la liquidación de los intereses moratorios se regula por el precepto legal contenido en la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario nro. 1510 de 2013, además, las partes no pactaron en los contratos unos intereses convencionales, por tanto, se hace uso de los legales.

5.4 CASO CONCRETO

² Artículo 439 del CGP. El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo serán en el suspensivo. Los recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo se tramitarán y resolverán conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados.

RADICACIÓN : 2015-00158-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ILIANA EDITH GIRON ALVAREZ
Demandado : HOSP. ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E



De conformidad con el artículo 320³ del C.G.P, aplicable por remisión del artículo 306⁴ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

A su turno, el artículo 328 ibídem dispone entre otros aspectos que: *“el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”*.

La representante legal de la empresa Medeihnos SAS, actuando a través de apoderado judicial, presentó demanda Ejecutiva en contra del Hospital Isaías Duarte Cancino, con el fin de que se libre mandamiento de pago a su favor por la suma de \$96.806.813, como consecuencia de la omisión en el cumplimiento de los contratos suscritos para el suministro de medicamentos e insumos quirúrgicos que requería la entidad hospitalaria⁵.

El Juzgado Quinto Administrativo de Cali a través del auto nro. 644 el 3 de octubre de 2016⁶ negó el mandamiento de pago solicitado y en consecuencia, el apoderado judicial de parte demandante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en providencia nro. 1135 del 26 de septiembre de 2018, que revocó la decisión tomada en primera instancia y ordenó librar mandamiento de pago en cuanto a las facturas y contratos nros. 1.7.1.015-2013 y 1.7.1.029-2013⁷.

Teniendo en cuenta dicha decisión, el Juzgado Quinto Administrativo de Cali profirió el auto nro. 286 del 27 de mayo de 2019⁸ que obedeció y cumplió lo ordenado por el superior y libró mandamiento de pago. Frente a los intereses, el despachó libro orden de pago teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013, es decir, a la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.

A su vez, profirió el auto nro. 288 del 27 de mayo de 2019 que decretó el embargo y retención de los dineros que posee el Hospital Isaías Duarte Cancino ESE, y limitó la medida a la suma de \$64.201.082⁹.

El apoderado judicial de la parte demandante no comparte dicha decisión, argumentando que la limitación de la cantidad embargable por \$64.201.082 según la aplicación del artículo 1617 del CC y de artículo 599 del CGP, no es la mitad del monto reconocido en segunda instancia, pues el valor sería de \$84.466.000, además

³ **Artículo 320. Fines de la apelación.**

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

⁴ **ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS.** En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

⁵ Folio 2-4

⁶ Folio 176-180

⁷ Folio 197-205

⁸ Folio 210- 211

⁹ Folio 2-4

RADICACIÓN : 2015-00158-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ILIANA EDITH GIRON ALVAREZ
Demandado : HOSP. ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E



expuso que, en el presente asunto los intereses moratorios deben ser tasados teniendo en cuenta la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia financiera¹⁰

El Despacho confirmará la decisión tomada por el A-quo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1) En el presente asunto, se busca se ejecute al Hospital Isaías Duarte Cancino por incumplir los contratos de insumo médico quirúrgicos nros.1.7.1.015-2013¹¹ y 1.7.1.029-2013¹², suscritos con la empresa Medeiornos SAS.

2) Cuando la obligación incumplida es de índole dineraria, la indemnización de perjuicios por la mora está constituida por el pago de intereses, tal y como lo determina el artículo 1617 del Código Civil, que de manera textual dispone:

Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.

El interés legal se fija en seis por ciento anual.

2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.

3a.) Los intereses atrasados no producen interés.

4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas.

3) De la lectura de las cláusulas pactadas en dichos contratos nros.1.7.1.015-2013 y 1.7.1.029-2013, no se desprende que las partes hayan convenido un interés moratorio y en virtud de ello, se debe aplicar el interés legal que corresponde al determinado en la Ley 80 de 1993, disposición especial que rige estos contratos.

Es así, como el artículo 4 de la Ley 80 determinó que los para salvaguardar los fines de la contratación estatal, se deben pactar unos intereses moratorios y de no hacerlo, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. De manera textual prevé:

“ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

“ ...

8o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos

¹⁰ Folio 215.

¹¹ Folio 78

¹² Folio 108

RADICACIÓN : 2015-00158-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ILIANA EDITH GIRON ALVAREZ
Demandado : HOSP. ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E



de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.

Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.

“ ...

Sobre el estudio de constitucionalidad de esta norma, la Corte Constitucional se pronunció a través de la providencia **C- 965 de 2013**, argumentado:

“En sentido contrario al que afirma el actor, el sistema de liquidación de intereses de mora consagrado en el inciso 2o. del numeral 8o. del artículo 4o. de la Ley 80 de 1993, que le reconoce al contratista la actualización y un interés de mora promediado en el doble del interés legal civil, es decir, del doce por ciento (12%) anual, en la medida en que no incorpora un factor para compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, no conlleva una doble actualización en detrimento del patrimonio público. Por el contrario, la formula acogida por el régimen de contratación, al no estar basada en el interés bancario, es concordante con principio de responsabilidad estatal y con los principios de equidad, igualdad, buena fe y garantía del patrimonio particular; específicamente, por cuanto su objetivo no es penalizar al Estado por su actuación reprochable ni otorgarle al contratista un provecho económico per se, sino reconocerle a este último una indemnización proporcional al daño antijurídico de que ha sido víctima y restablecer la equivalencia económica del contrato. En este contexto, se repite, la tasa del doble del interés legal busca amparar al acreedor por el daño antijurídico que le representa el retardo injustificado de la entidad en el pago de la obligación, pero sin consideración a su poder adquisitivo”.

Esta norma fue reglamentada por el artículo 1 del Decreto 679 de 1994, que estableció la metodología para aplicarla, en los siguientes términos:

“Artículo. 1o- De la determinación de los intereses moratorios. Para determinar el valor histórico actualizado a que se refiere el artículo 4o, numeral 8o de la Ley 80 de 1993, se aplicará a la suma debida por cada año de mora el incremento del índice de precios al consumidor entre el 1o de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días transcurridos.”

Al respecto, el Consejo de Estado¹³ al analizar la condena de pago de intereses moratorio en los procesos ejecutivos cuando la omisión proviene de un contrato estatal, consideró:

Se analizará ahora la otra inconformidad que presentó el Municipio contra la sentencia, que no sólo condenó al pago del capital –lo cual confirmará la Sala-, sino que también lo actualizó y ordenó el pago de intereses de mora. Sostiene el apelante que el actor no solicitó esta última condena, y por eso la sentencia es *extrapetita*.

¹³ Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, radicado nro. 700012331000199605714 01.

RADICACIÓN : 2015-00158-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ILIANA EDITH GIRON ALVAREZ
Demandado : HOSP. ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E



La Sala entiende que la pretensión trascrita contiene la solicitud de pago de los intereses moratorios. De hecho, con fundamento en la capacidad que tiene el juez de interpretar la demanda, para dilucidar su sentido real y preciso, y también para ajustarse al principio constitucional que establece que el derecho procesal se entiende vinculado al sustancial, para que este cumpla su finalidad material; a partir de los hechos y de las pretensiones no queda duda que la demanda no sólo buscaba que el Municipio pagara el capital, sino también los intereses de mora por el retardo en cancelarlo. Por eso el actor solicitó, en la pretensión trascrita, que "... se condene al MUNICIPIO DE SINCE (SUCRE), a pagar a mi mandante o a quien sus derechos represente, el monto de los perjuicios de toda índole sufridos por el actor...", petición que, en sana lógica, perseguía igualmente el pago de los intereses.

Además, no se olvide que esta clase de perjuicio no exige prueba especial para su exigibilidad, porque la ley simplemente establece que se presumen, sin que se requiera acreditar un daño en particular. Basta demostrar que se tiene un crédito, y que se presentó la mora en el pago, con lo que surge, inmediatamente, el derecho al mismo. En este sentido, establece el art. 1.617 del Código Civil:

“ ...

En estos términos, si el artículo citado presume el daño por el retardo en el pago de sumas de dinero, y que ese perjuicio adopta la figura del *interés moratorio*, bastaba al actor pedir la condena al pago "... de los perjuicios de toda índole sufridos por el actor..." para que el juez entendiera que alude a los intereses moratorios, que la ley supone causados por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación dineraria.

Definido el anterior aspecto, y de otro lado, los intereses que debe reconocer el Municipio son los de la ley 80 tal como los liquidó el a quo: porque el contrato se firmó en vigencia de este estatuto de contratación, y también porque no habiéndose pactado un porcentaje distinto en el contrato, entonces se debía acudir a la ley. En estos términos, la norma aplicable es el art. 4, num. 8, de la ley 80, que dispone:

“ ...

En virtud de estas disposiciones quedó claro que las partes pudieron pactar un interés ajustado al permitido por la ley, que se denomina *interés convencional*, pero dado que no lo hicieron –según se infiere del contrato aportado- entonces aplica el *interés legal*, que en este caso no corresponde al de la ley civil, ni al de la ley comercial, sino al de la ley 80, que es la disposición especial que rige este contrato, y que por aplicación del artículo 13 de la ley 80 excluye las normas del derecho privado, cuando en ella se regula un tema de manera especial, como en este caso.

Por las razones expuestas, el a quo decidió acertadamente el proceso, al condenar no sólo al pago de intereses, sino también al aplicar la tasa de la ley 80 de 1993. Por estas razones, se confirmará la sentencia; no obstante la liquidación se hará a continuación. (Subrayado fuera del texto).

Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, el Despacho considera que en el presente asunto, los intereses moratorios objeto de discusión deben liquidarse teniendo en cuenta lo previsto en la norma especial en materia de contratación estatal, Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario Nro. 1510 de 2013, ya que como se expuso, al no contener los contratos objeto de ejecución una cláusula de interés convencional, las partes deben guiarse por el legal.

Por tanto, no es de recibo el argumento expuesto por el apodado judicial de la parte demandante, cuando indica que el interés moratorio establecido por la Superintendencia Financiera es el operante en el presente asunto, pues como lo ha

RADICACIÓN : 2015-00158-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ILIANA EDITH GIRON ALVAREZ
Demandado : HOSP. ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E



expuesto el Consejo de Estado¹⁴, la liquidación de los intereses que estableció la ley de contratación estatal tiene unos lineamientos similares a los expuestos para las obligaciones mercantiles, pero al ser la Ley 80 la regulación que rige lo concerniente a las relaciones contractuales de índole estatal, es la norma que debe ser aplicada. Al respecto expuso:

Como se puede apreciar, el Código de Comercio en el artículo 884 reproducido, indica que en los negocios mercantiles el pago de réditos de un capital cuando las partes no hubiesen pactado el interés, éste será el bancario corriente, o sea aquel que surge del promedio cobrado por los Bancos por los créditos otorgados a los usuarios de su actividad, según certificación expedida por la Superintendencia Bancaria (ahora Financiera), cuya fórmula de cálculo contiene el costo puro del dinero, el riesgo de la operación y la depreciación monetaria o inflación, de manera que excluye la actualización de la suma adeudada, porque la tasa remuneratoria o la moratoria, según el caso, incluye ya el resarcimiento inherente a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Dicho de otra forma, y de acuerdo con la jurisprudencia y la norma citada (art. 884 C Co.), no es posible que se reconozcan los intereses legales comerciales corrientes remuneratorios o de mora además de la corrección monetaria, puesto que las tasas de las mismas ya aparejan la indexación de la moneda. Esto significa que la norma de la Ley 80 de 1993, reglamentada en el Decreto 679 de 1994, fue concebida como un mecanismo de índole indemnizatoria para la preservación de la ecuación económica del contrato, ante el incumplimiento de la Administración de pagar dentro de los plazos estipulados el precio o suma de dinero convenida en el mismo, con el propósito de sancionar la mora, reparar los perjuicios derivados de ésta y mantener el poder adquisitivo del dinero, razón por la cual la jurisprudencia ha advertido que “[e]ste modo de liquidación de los intereses que estableció la ley de contratación estatal sigue un lineamiento similar al de las obligaciones mercantiles, el cual se desprende de la actualización del capital que la norma incluye.

“ ...

“Tiempo después, este reconocimiento de intereses moratorios y su tasa se recogió en el transcrito numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en cuanto prescribió que sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios en los contratos que celebren las entidades estatales, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. Es decir, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 en la contratación estatal la tasa del interés de mora aplicable en cada contrato que celebren las entidades sea civil o comercial, ante el silencio de las partes, es la establecida en esta disposición del Estatuto General de la Contratación Pública, y no la previstas en el Código Civil o el Código de Comercio, lo que no obsta para que puedan pactar expresamente éstas, siempre y cuando se respeten los límites impuestos en la ley, en cuanto al interés de usura, según lo explicó en su oportunidad esta Sección [Sentencia del 17 de mayo de 2001, Exp. 13.635, que reitera sentencia de 28 de octubre de 1994, Exp. 8092]”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que la decisión tomada por el Juzgado Quinto Administrativo de Cali, tiene respaldo legal y jurisprudencia y la tasación de los intereses generados por las sumas de dinero objeto de mandamiento de pago, se efectuó en debida forma teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario Nro. 1510 de 2013, por tanto, se confirmará el auto nro. 288 del 27 de mayo de 2019.

En consecuencia, se;

RESUELVE

¹⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, proceso nro. 25000-23-26-000-1997-03663-01(17214).

RADICACIÓN : 2015-00158-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : ILIANA EDITH GIRON ALVAREZ
Demandado : HOSP. ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E



PRIMERO. -CONFIRMAR el auto nro. 288 del 27 de mayo de 2019, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Cali.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,



ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA



EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS



OMAR EDGAR BORJA SOTO